

**JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6**

Avenida Pedro San Martín S/N

Santander

Teléfono: 942357111

Fax.: 942357150

Modelo: TX004

Proc.: PROCEDIMIENTO ORDINARIONº: **0000052/2014**

NIG: 3907542120140000749

Materia: Obligaciones

Resolución: Sentencia 000201/2014

Intervención:	Interviniente:	Procurador:
Demandante		LUIS SIMÓN CEBALLOS FERNÁNDEZ
Demandado		ENRIQUE MENÉNDEZ CRIADO

SENTENCIA nº 000201/2014

En Santander, a 3 de diciembre de 2014.

Vistos por el Ilmo./a D./Dña. María Dolores Martínez Melón, Magistrado-Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 de Santander y su Partido, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 0000052/2014 seguidos ante este Juzgado, a instancia de

representado por el Procurador D./Dña. LUIS SIMÓN CEBALLOS FERNÁNDEZ y asistido por el Letrado D./Sr Ruben Franco contra
representado por el Procurador ENRIQUE MENÉNDEZ CRIADO y defendido por el Letrado D./Isabel Gandarillas sobre responsabilidad extracontractual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales Sr Ceballos Fernández, en nombre y representación de Don , frente a Doña , y después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente acabó suplicando se dicte sentencia por la que se condene a la demandada a pagar al actor la cantidad de 78.491,00 euros más los intereses legales desde el día de la interposición de la demanda



SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 7 de febrero del 2014 se acordó admitir a trámite la demanda así como emplazar a la demandada.

Transcurrido dicho plazo, la demandada comparece en tiempo y forma, contestando y oponiéndose a la demanda

Por diligencia de ordenación de fecha 7 de mayo del 2014, cumplidos los plazos y trámites previstos en el artículo 414.1 LEC se acuerda convocar a las partes a la celebración de la audiencia previa para el día 19 de junio del 2014

TERCERO.- Llegado tal día, comparecieron ambas partes, y no siendo posible un acuerdo, se resolvieron las incidencias procesales, tras lo cual se fijaron los hechos debatidos. Tras todo lo anterior, ambas partes propusieron prueba, declarándose pertinente documental, señalándose para la celebración del juicio el día 16 de septiembre tras la práctica de la prueba en dos sesiones plenarias, la última de ellas, el día 4 de noviembre, las partes concluyeron por su orden sobre su valoración y los argumentos de derecho que fundamentan sus pretensiones, declarándose los autos conclusos y vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora una acción de responsabilidad extracontractual frente a la demandada, ex artículo 1902 CC y otra, de forma velada, de cobro de lo indebido sustentada en el artículo 1895 del Código Civil. En aras a sustentar tal pretensión el demandante efectúa el siguiente relato de hechos: El Sr. [redacted] se halla divorciado de Doña [redacted] por sentencia firme de fecha 2 de febrero del 2012. Tras dictarse la sentencia recibe una serie de burlas haciendo referencia a la posibilidad de que la menor no fuera hija de él. Por dicho motivo, el Sr. [redacted] decide comprobar mediante la realización de una prueba de paternidad la veracidad de los hechos, acometido que encarga a un laboratorio privado



que emite informe en fecha 13 de marzo del 2012 (doc n 5 y 6) que concluye aseverando que el demandante no es padre biológico de azucena. En fecha 3 de abril del 2012 interpone demanda de juicio declarativo sobre impugnación de paternidad, demanda a la que se opone la Sra y su hija. En fecha 18 de junio del 2013 se dicta sentencia por la que se declara que no es su hija.

Mantiene el actor que, como consecuencia de haber perdido a una hija, después de un vínculo de casi 18 años, ha venido siendo tratado por médicos Psicólogos adscritos a la

Cuantifica el actor el daño moral causado por tal pérdida en la cantidad de 70.000, 00 euros, al considerar que el impacto ha sido similar al de perder a un hijo por fallecimiento ya que desde que conoció el informe del laboratorio rechaza el contacto con quien hasta ahora creía ser su hija biológica. Solicita también el reintegro de la pensión de alimentos desde la fecha de la sentencia de divorcio hasta junio de 2013, lo que suma un total de 7.500 euros, así como los gastos realizados en la pruebas de paternidad (991 y 295 euros, respectivamente).

Se opone la demandada a las pretensiones del demandante sosteniendo que en ningún momento ha ocultado a su marido la paternidad de su hija, sino que desde que supo que estaba embarazada le comunico al Sr la posibilidad de que no fuera el padre de la niña, lo que ha venido a confirmarse con la realización de las pruebas de paternidad.

En todo caso apoya su argucia defensiva en que no es cierto que el Sr haya estado siendo tratado por médicos Psicólogos como consecuencia de haber perdido una hija, sino más bien por razones ajenas a las que aquí nos ocupan y que tienen más que ver con cuestiones profesionales.

En este orden de cosas arguye la demandada la excepción de prescripción de la acción ya que ha transcurrido más de un año desde que conociera su no paternidad cuando ha interpuesto la demanda.

SEGUNDO.- Delimitado que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, en lo que a la reclamación de daños morales respecta, hemos de adentrarnos en la primera causa de oposición



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

argüida por la demandada, es decir determinar si efectivamente se ha producido la prescripción de la acción ejercitada.

A este respecto es necesario traer a colación la sentencia del TS de 14 de julio de 2010 que señala que " En cambio sí es pertinente al caso examinado el criterio seguido por la sentencia de 28 de octubre de 2009 (rec. 170/05) distinguiendo entre el daño continuado y el daño duradero o permanente, que es aquel que se produce en un momento determinado por la conducta del demandado pero persiste a lo largo del tiempo con la posibilidad, incluso, de agravarse por factores ya del todo ajenos a la acción u omisión del demandado. En este caso de daño duradero o permanente el plazo de prescripción comenzará a correr "desde que lo supo el agraviado", como dispone el art. 1968-2º CC, es decir desde que tuvo cabal conocimiento del mismo y pudo medir su transcendencia mediante un pronóstico razonable, porque de otro modo se daría la hipótesis de absoluta imprescriptibilidad de la acción hasta la muerte del perjudicado, en el caso de daños personales, o la total pérdida de la cosa, en caso de daños materiales, vulnerándose así la seguridad jurídica garantizada por el artículo 9.3 de la Constitución y fundamento, a su vez, de la prescripción.

En efecto si nos remitimos a los conceptos empleados en la reclamación el demandante, tal y como expone en su relato de hechos, que reproducimos en el ordinal primero de la presente resolución, ha de destacarse que no obtuvo la confirmación definitiva de que no era el progenitor de hasta que se practicó el informe de fecha 5 de abril del 2013 realizado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid que vino a confirmar el emitido por un laboratorio privado de fecha 13 de marzo del 2012, que sirvió como indicio necesario para interponer la demanda. Sostiene el demandante que su ex esposa mantuvo y alentó en él la paternidad de su hija ya que se opuso radicalmente a la demanda de impugnación de la paternidad, lo que se desvaneció con el referido informe. A mayor abundamiento, consta en informe de fecha 4 de septiembre del 2013 emitido por la doctora en la que se hace balance de su diagnóstico motivado por la constatación de que no es padre de De la misma manera consta informe de fecha 16 de



septiembre emitido por la doctora (doc 7,8 y 9). Luego, si la demanda ha sido presentada el día 16 de enero del 2014, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, no había prescrito la acción para exigir a la demandada indemnización por daños y perjuicios con base en el art. 1902 CC.

A mayor abundamiento no es de recibo computar como periodo inicial del cómputo la fecha del primer informe, porque lo que está claro, al oponerse a la demanda de impugnación tanto la hija como la madre, de forma tácita se introducida falsas esperanzas al actor de que fuera realmente el padre, lo que vino desvelado por la sentencia dictada en el procedimiento de impugnación de la filiación, o en todo caso por la segunda prueba de paternidad practicada en el procedimiento referido.

TERCERO.- En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, en la demanda origen de los presentes autos se ejercitan dos acciones que tienden a justificar dos reclamaciones disímiles. Una primera, con fundamento en el instituto del cobro de lo indebido, para reclamar las cantidades abonadas en concepto de alimentos a quien luego se declaró no ser hija biológica suya (7.500Eur.). La segunda, a partir de la responsabilidad extracontractual "ex artículo 1902 del Código Civil " para reclamar el importe de los gastos que ocasionaron al actor la realización de dos pruebas biológicas (por importe total de 991 euros.), entendiendo la existencia de actuación dolosa de la demandada que, pese a estar en conocimiento de la verdadera paternidad del menor, ocultó tal hecho al actor , y una vez rota tal relación, no solo se burló de él sino que obtuvo una pensión alimenticia para la menor.

En el concreto supuesto en el que nos encontramos, dos Sentencias del Tribunal Supremo denegaron las acciones ejercitadas. La primera de ellas de 22 de julio de 1999 deniega las cantidades solicitadas (daño moral, alimentos) por cuanto la conducta de la madre no había sido dolosa quien únicamente fue conocedora de la verdadera paternidad tras las pruebas biológicas realizadas. La de fecha 30 de julio de 1999, igualmente desestimatoria, por cuanto el incumplimiento de deberes conyugales no



genera obligación indemnizatoria sino tan sólo fundamenta causa de separación matrimonial.

En esta línea se enmarca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª, de 2 de noviembre de 2007, que interpretando a sensu contrario la primera de las Sentencias citadas del Tribunal Supremo, concede una indemnización al marido por el concepto de daño moral al entender que la conducta de la esposa había sido dolosa (no ya sólo negligente como se entendió en la instancia) ya que "...consideramos que Dª . y don . conocieron, desde el primer momento, que los menores, no eran hijos del Sr. . pese a lo cual, permitieron que se inscribieran en el Registro Civil como sus hijos, y que pasaran a formar parte de su familia, con todas las obligaciones, derechos y vínculos a ello inherentes, actuación que repitieron con los tres niños y han mantenido desde 1996 hasta octubre de 2002, y en este actuar consciente, estimamos que radica el dolo de los demandados, que ha generado, al romperse el vínculo afectivo que nació entre los menores y D. . propio de una relación paterno-filial, un daño moral que debe ser resarcido". Niega, por el contrario, que puedan ser indemnizados otros daños diferentes a los morales y, en particular, por los alimentos prestados y por la realización de pruebas de paternidad, si bien en virtud de los acuerdos alcanzados por las partes (reconocimiento de deuda por la esposa), añadiendo que "los alimentos de los hijos, no pueden ser objeto de restitución" y respecto a los gastos de pruebas biológicas "dado que los mismos no eran necesarios para este procedimiento, en todo caso, lo serían, para el de impugnación de la paternidad".

En parecidos términos se han pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18ª, de 16 de enero de 2007 que entendió conducta negligente en la esposa quien "pudo y debió sospechar que podía ser otro el padre de la menor, al haber mantenido relaciones sexuales con dos personas al tiempo de su concepción y debió adoptar las medidas tendentes a su veraz determinación", concediendo al esposo una indemnización por daño moral.

En cuanto a la restitución de alimentos prestados la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1999, que contempla un caso muy semejante a



éste y que expresamente desecha. Aquí parte la Sala de que el pago de alimentos entre los años acotados hasta la sentencia que declara la no paternidad, lo es en cumplimiento de una sentencia que así lo determina; y esas cantidades (o la concreta de la menor cuestionada) lo es en cuanto que nacida dentro del matrimonio goza del carácter de hija de ambos, a quienes se les atribuye su paternidad; y alimentos sobre los que opera el principio jurídico de su no devolución en cuanto a las cantidades percibidas por las mismas. Existe, por tanto, una apariencia de probidad en el derecho al cobro y en la obligación de pago, que necesitaría para que operara contra quien los recibe (y no se olvida que lo son para consumir por quien aparentemente es hijo) que se acreditara la existencia de dolo en la reclamación o mala fe en los momentos periódicos de su percepción para que pudiera operar la posibilidad del reintegro a través del cobro de lo indebido, y los alimentos se deben hasta la sentencia que reconoce que la menor no es hija del actor, en tanto que ni en el presente procedimiento, ni en los anteriores, ha podido ser acreditado que la Sra.

actuó con ese dolo o esa mala fe, pues que no ha sido probado que, a priori, conociera que no era hija del Sr. carga de la prueba que conforme al artículo 1.214 del Código Civil, correspondía a éste. Por lo expuesto no se entiende aplicable al hecho objeto de enjuiciamiento el artículo 1.895, al no darse los requisitos necesarios para su observancia, ya que el cobro indebido sólo se produciría (aquí ni observando el auto de la AP. Barcelona, Sec. 12ª, de 9.1 1.99 antes mentado) cuando el cobro o su reclamación se realizara a sabiendas de que se había perdido el derecho a los alimentos por existir una resolución firme que negara el derecho, es decir, la paternidad, puesto que (Cfr. art. 110, CC) el derecho a percibir alimentos nace de la relación padre-hijo, y la misma no se extingue hasta el momento que una resolución judicial así lo declare, momento a partir del cual cesará el derecho de alimentos, hasta entonces existente".

En todo caso, no se puede estimar la pretensión del actor en tanto que el Sr. ha venido a abonar los alimentos porque así lo ordena una sentencia que es firme, siendo esta la que le impone el deber y no pudiéndose dejar mediante este procedimiento una sentencia como no



puesta por el principio de la invariabilidad de las resoluciones, solo ello podría tener lugar habiendo instado su nulidad lo que ahora sería extemporáneo o mediante el correspondiente recurso extraordinario de revisión, que no consta se interpusiera. Por ello aunque pueda parecernos ciertamente un pago realizado por mediar una realidad que era inexistente, no es este el cauce para dejar sin efecto lo que la sentencia acordó y en virtud de la cual surgió la obligación de abonar alimentos, hasta que otra sentencia estimo la impugnación de la paternidad

Pues bien, corolario de lo anteriormente expuesto quien ahora resuelve se decanta abiertamente por la imposibilidad de recobro de alimentos prestados por no reunirse los requisitos precisos para la aplicación de la figura del cobro de lo indebido y ello con independencia de la buena o mala fe, de la actuación culposa o negligente de la esposa, que no afecta al instituto señalado, además de considerar que la obligación de hasta ese momento padre, debía abonarlos en virtud de sentencia firme que no fue objeto del oportuno recurso de revisión

Por lo que respecta a los gastos por los informes de paternidad tampoco deben ser acogidos en el procedimiento del que traen causa por ser más propios de las costas causadas en el mismo, que de la responsabilidad extracontractual por daños morales en que justifica su acción.

CUARTO.- Adentrándonos en lo que resulta ser núcleo esencial de la reclamación los daños morales ocasionados al demandante, necesariamente debemos partir del criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia de 2/noviembre/2004, luego reiterado por otra de similar fundamentación de 5/septiembre/2007 (Sección 7ª). Creemos que fue la resolución que de algún modo abrió la brecha en la doctrina del Tribunal Supremo antes referida. Su cita, por tanto, es ineludible.

Siguiendo la última de las sentencias citadas, cuyo contenido hacemos nuestro con las matizaciones y precisiones que luego se harán, se ha de indicar lo que sigue: "Si bien la infidelidad conyugal no es indemnizable, sí



lo es la procreación de un hijo extramatrimonial con ocultamiento a su cónyuge". Para ello la sentencia parte de la sentencia del Tribunal Supremo citada de 22/julio/1999, interpretada a sensu contrario, pues la misma aludía a que el art. 1902 del Código Civil "no resulta aplicable al caso de autos, en el que, como ha quedado razonado, no era posible hacer aplicación del meritado precepto, debido a no haberse apreciado una conducta dolosa". Pues bien ello permite concluir a la Audiencia Provincial de Valencia "que sí sería aplicable el artículo 1902 del Código Civil y procedería reparar el daño causado si se acreditara una actuación dolosa. Y hemos de tomar en consideración, la aparición progresiva en la doctrina y la jurisprudencia de excepciones a la regla general de inmunidad en el ámbito de las relaciones familiares y conyugales, y que entre tales excepciones, pueden destacarse la exclusión de los daños dolosos. En esta corriente, podemos hacer referencia al Tribunal Supremo Alemán que ha reconocido excepcionalmente el derecho a ser indemnizado, por causación dolosa de daños contra bonos mores, si el adulterio va acompañado de una intención cualificada de causar daño (...), estimando que se trataría de un hecho generador de responsabilidad extracontractual y que obligaría a reparar el daño causado".

Un paso más adelante es el que da la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª) en su sentencia de 16/enero/2007. Es así que, desmarcándose del requisito del dolo exigido por el Tribunal Supremo, la referida resolución califica de negligencia constitutiva de responsabilidad extracontractual la omisión de la adopción de medidas dirigidas a determinar la paternidad biológica, pues la demandada "pudo y debió sospechar que podía ser otro el padre de la menor". De modo contundente afirma que "la culpa o negligencia a que se refiere el art. 1902 del Código Civil constituye un concepto más amplio que el dolo o intención maliciosa. Puede afirmarse que (la demandada) no tenía la certeza o no sabía que el padre de la menor no era su marido, pero pudo y debió sospechar que podía ser otro el padre de la menor, al haber mantenido relaciones sexuales con dos personas al tiempo de su concepción y debió adoptar las medidas tendentes a su veraz determinación. La omisión en la adopción de dichas medidas debe calificarse como un comportamiento o conducta



negligente a los efectos de lo dispuesto en el art. 1902 del Código Civil, por lo que de su actuación u omisión se deriva responsabilidad extracontractual".

La referida construcción se adecua mejor a la realidad de las cosas. Es cierto que en el ámbito del Derecho de Familia solo los incumplimientos en los que medie dolo o culpa grave generan de ordinario responsabilidad (se suele citar como ejemplos la responsabilidad de los padres en la gestión de los bienes de sus hijos menores del art. 168 del Código Civil o la del administrador de la sociedad de gananciales en los términos establecidos en el art. 1390 del Código), pero no lo es menos que el art. 1902 con carácter general nada establece al respecto: cualquier hecho dañoso, antijurídico, imputable a una falta de diligencia de quien lo comete ya genera su responsabilidad. Exigir en este ámbito una culpabilidad reforzada se antoja innecesario y además resulta, la mayoría de las veces imposible. Otra cosa es que el hecho generador de la responsabilidad aparezca de alguna manera cualificado, esto es, que no se trate de incumplimientos de escasa trascendencia personal. Pero ello no implica que sea exigible un criterio subjetivo de atribución de responsabilidad reforzado por el dolo.

Centrándonos en la cuestión objeto de debate ha podido constatar el dolo en la demanda, y ello después de una valoración conjunta y crítica de la prueba practicada. En primer lugar el sr [redacted] negó con rotundidad que su esposa le haya informado acerca de las posibilidad de que él no fuera el padre de [redacted], es más aseguró que nunca dudó de su paternidad, duda que si surgió a raíz de dictarse la sentencia de divorcio pues su ex esposa le insinuó que podía no ser el padre de ella, lo que le provocó una fuerte depresión.

Tal dato ha venido corroborado por la prueba pericial, practicada en la persona de su médico Psiquiatra, Sr [redacted], quien depuso en el plenario y con todo lujo de detalles aseguró que nunca su paciente, el sr [redacted], le había manifestados tales dudas acerca de la paternidad, cosa que hizo en un determinado momento del tratamiento cuando le expuso que dudaba de la paternidad, lo que repercutió considerablemente en su cuadro depresivo iniciado a raíz de su ruptura matrimonial (doc nº 7).



Por su parte, pretende hacer ver la demandada que el Sr conocía la posibilidad de que no fuera el padre ya que se lo manifestó a raíz de que supo que estaba embarazada. Mantiene sin embargo en su contestación a la demanda que supo que no era el padre a raíz de las pruebas biológicas practicadas durante la tramitación del procedimiento de impugnación de la filiación. A continuación añade que desconoce quién es el verdadero padre de (página 2 y 3 de la contestación a la demanda). Este razonamiento nos lleva a pensar que la demanda ha simultaneado contactos sexuales al menos con su esposo y el padre de su hija.

Pues bien, ante la dificultad de probar que ha existido ocultación puede presumirse que la esposa que mantiene simultáneamente relaciones sexuales con otro hombre y queda embarazada sabe o puede saber que existe más de una paternidad posible. En consecuencia, debe hacer todo lo razonable para determinar la paternidad biológica desde el primero momento, evitando así, si es el caso, que se considere padre al marido por el juego de la presunción legal de paternidad matrimonial. Y esa conducta ya es en sí mismo gravemente negligente y legitima su responsabilidad. A mayor abundamiento, que fue la propia demandada la que en un momento determinado negó que fuera el padre, lo que significa que sabía que podría no ser el padre y nada hizo para solventar dicha duda, lo que desde luego le es imputable, y lo que es más importante se contradice en las anteriores afirmaciones cuando en la contestación a la demanda en el procedimiento de impugnación de la filiación se opone radicalmente a las pretensiones del actor afirmando que la impugnación se sustentan en los celos y la situación psicológica que le han hecho dudar de su paternidad (aun así ya constaba unido a la demanda informe privado que sentaba la no paternidad del Sr). A mayor abundamiento la sentencia firme dictada en el referido procedimiento proclama que ha quedado acreditado un evidente vicio de voluntad a la hora de reconocer a su hija como propia.

La ex esposa, como último remedio defensivo apela a que el S no ha sido un buen padre para su hija, pues nunca se había preocupado de ella. Nada de esto se ha acreditado, la ex esposa no da razones para



entender que así sea, por su parte la supuesta hija tampoco concreta, si bien asegura que tuvo mala relación con su padre apela a que ha venido motivado por los problemas psicológicos motivados por una nefasta relación de pareja. En este sentido la Sr. aseguró que trató en terapia a los tres miembros de la familia y el Sr. participaba y se involucraba positivamente ante los problemas que presentaba su hija que no eran otros que un trastorno de conducta por razones de la edad.

QUINTO.- Efectuados los pronunciamientos anteriores la dificultad se halla en cuantificar económicamente la realidad de los daños morales ocasionados al actor, es por ello que nuevamente hemos de recurrir a la doctrina emanada del tribunal supremo puede ser resumida, entre otras en la sentencia de 9/diciembre/2003 en la que se indica: "Nuestro Código Civil no contempla la indemnización por daños morales, si bien su artículo 1107 impone el resarcimiento de "todos" y ha sido la jurisprudencia casacional civil, que se invoca (...) la que ha ido elaborando doctrina continuada y progresiva sobre su procedencia ya desde las antiguas sentencias de 6 de diciembre de 1912 y de 19 de diciembre de 1949, declarando que si bien su valoración no puede obtenerse de pruebas directas y objetivas, no por ello se ata a los Tribunales y se les imposibilita legalmente para poder fijar su cuantificación, cuando efectivamente han concurrido (...) y a tales efectos han de tenerse en cuenta y ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso, pues lo que se trata precisamente no es de llevar a cabo una reparación en el patrimonio, sino de contribuir de alguna manera a sobrellevar el dolor y angustia de las personas perjudicadas por el actuar injusto, abusivo o ilegal de otro. En términos generales, como de manera exhaustiva analiza la Sentencia de 22 de febrero de 2001, el daño moral se sustantiva para referirlo al dolor inferido, sufrimiento, tristeza, desazón o inquietud que afecta a la persona que lo padece".

Y no cabe duda, como la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia ya expuso, que puede ser también aspecto integrador de ese daño moral, "cualquier frustración, quebranto o ruptura en los sentimientos, lazos o afectos, por naturaleza o sangre que se dan entre personas allegadas fundamentalmente por vínculos parentales, cuando a consecuencia del hecho ilícito, se ve uno de ellos privado temporal o



definitivamente de la presencia o convivencia con la persona directamente dañada por dicho ilícito, o por la situación deficitaria o de auténtica orfandad en que pueden quedar ciertas personas por las lesiones por la muerte de sus parientes más cercanos, por ejemplo, en el supuesto de una relación parental intensa, la pérdida del padre con respecto a los hijos, o a la inversa y demás parientes, o incluso, a veces, por relaciones de propia amistad o convivencia, o cuando dichas personas conviven tan estrechamente que se crean lazos pseudo-parentales".

A esta jurisprudencia cabe añadir la relativa a que, si bien como toda indemnización el daño moral ha de ser probado por quien lo reclama por mor del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, cuando emane de un daño material o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, no así cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la *in re ipsa loquitur*, o cuando se da una situación de notoriedad, supuestos en los que no es exigible una concreta actividad probatoria. Como ha quedado dicho no es este el caso de autos en el que consta con suficiente nitidez que el padecimiento moral cierta y efectivamente se ha producido.

En el presente supuesto ha quedado acreditada la existencia de un daño psíquico causado al demandante motivada por el conocimiento de que no era el progenitor de la que, hasta el momento, había sido su hija. La práctica de la prueba pericial ha sido contundente. La Sr. [redacted] ha sido excesivamente clara en el plenario al asegurar que el sr. [redacted], a quien trataba desde el año 2011 (informe doc nº 7) agravó el cuadro ansioso-depresivo que presentaba a raíz de la ruptura de su matrimonio cuando en el año 2012 le trasladó las sospechas que tenía acerca de la paternidad de su hija, sin que ello haya resultado desproporcionado. Asegura además la perito, médico Psiquiatra que el Sr. [redacted] continúa en terapia por esta razón, lo que es proporcional a las circunstancias de haber perdido a quien hasta ahora consideraba su hija por lo que el duelo exige un periodo de tiempo para que puedan mitigarse las dolencias



Llegados a este punto el problema queda circunscrito a la difícil cuestión de valorar el daño moral, sin duda infringido. En este caso nos resulta complicado cuantificarlo pues la parte reclamante hace un cómputo general aplicando el baremo para los accidentes de circulación normas del baremo que son objetivas. Así lo admite el Tribunal Supremo. La STS, Civil, de 13 de abril del 2012, Recurso: 934/2009, declara:

"la Jurisprudencia de esta Sala admite que el daño moral se identifica con las consecuencias no patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en algunas personas pueden producir ciertas conductas, actividades e incluso resultados, con independencia de la naturaleza, patrimonial o no, del bien, derecho o interés que ha sido infringido, y se indemniza junto al daño patrimonial, bien mediante la aplicación de reglas específicas, como la del artículo 1591 del Código Civil, bien mediante las generales de responsabilidad contractual o extracontractual de los artículos 1101 y 1902 del mismo texto legal (SSTS 16 de noviembre de 1986: trastorno y angustia ocasionada a una familia que se vio obligada a abandonar la casa; de 10 de noviembre de 2005: pérdida de las vacaciones estivales; de 22 de noviembre de 200: abandono de vivienda por obras defectuosas graves, entre otras)."

"La doctrina y la jurisprudencia (SS TS 22-9-2004 y 10-3-2009) admiten su existencia, si bien con cautela para evitar reclamaciones injustificadas o amparadas en incumplimiento de escaso calado."

"Es cierto que el daño moral no produce una pérdida económica de carácter material, ni una disminución del patrimonio, ni se identifica con el lucro cesante, aunque puede derivar de un daño patrimonial pero puede significar malestar, zozobra, desasosiego, indignación, perturbación, ansiedad, preocupación susceptible de generar desestabilización e inquietud, inestabilidad emocional personal y/o familiar, del ciudadano/a medio, etc., disfunciones que pueden tener una compensación económica."

El demandante sostiene que el daño sufrido ha de equipararse al de la pérdida de un hijo de 18 años, por lo que se solicita una indemnización de 70.000 euros, conforme determina la jurisprudencia. Aduce de forma velada el actor en reclamación de la indemnización por daños morales, su estado de depresión grave con ansiedad elevada, y la ocultación por la



madre biológica de la paternidad de . Qué duda cabe que esta afectación a la salud del actor, y la conducta de ocultación de la madre, comportan un daño moral, que debe ser objeto de indemnización, en virtud de la acción reparadora entablada, no obstante consideramos excesiva la cuantificación, no solo porque el demandante no aporta razones para entender que debe ascender a esa cantidad, a salvo la que refiere como jurisprudencial, que no aporta, sino que la demandada se opone a la cuantificación basada en razones patrimoniales que en el presente no vienen al caso ya que son daños morales los que se reclaman por el ex esposo. No podemos entender como parámetro el impacto que se siente al perder a una hija como si hubiese fallecido porque la realidad no es esa, son otras las pérdidas que se producen cuando fallece una persona joven, pese a que el demandante no desea tener contacto con ella al día de la fecha y por ello romper la relación paterno filial que hasta ahora les había unido.

Y en cuanto al daño moral resulta absolutamente indeterminado al carecer de parámetros objetivos, ello no obstante se viene valorando a estos efectos la duración de la relación paterno filial, si se desarrolló en el marco de una relación matrimonial o de pareja, la edad del menor, o el vínculo afectivo existente, a lo que hemos de añadir también el alcance concreto de la relación. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18ª, de 16 de enero de 2007, y SAP de Murcia 18-11-2009).

En el caso actual consta acreditado que hubo una participación muy activa del recurrente en el cuidado de la hija, y un vínculo afectivo importante, a la par que ha de considerarse el coste emocional y psicológico que estos hechos le produjeron, del que hay constancia en autos. Y las razones expuestas permiten ponderar adecuada que la suma de 30.000 euros permite mitigar el daño causado por la Sr : al Sr , cantidad que devengará el interés legal a partir de esta resolución.

Tal y como se ha adelantado se desestiman el resto de los pedimentos indemnizatorios contenidos en la demanda.



SEXTO.- Que habiéndose estimado la demanda parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas causadas no procede imponerlas a ninguna de las partes

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey pronuncio el siguiente

FALLO

Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador de los Tribunales Sr. Ceballos Fernández en nombre y representación de Don . . . frente a Doña . . .

se condena a la demandada a pagar al actor la cantidad de 30.000 euros por daños morales. Cantidad a la que se aplicará el interés legal desde el dictado de la presente resolución.

No se hace expresa imposición de costas

Contra esta resolución cabe interponer **RECURSO DE APELACION** ante este Tribunal, por escrito, en plazo de **VEINTE DIAS** contados desde el siguiente a la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el mismo, se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANESTO nº . . . con indicación de "recurso de apelación", mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.